

## **Petro el Depredador: asesinatos masivos y devastación Ambiental en Colombia**

[www.360geopolitica.org](http://www.360geopolitica.org)

### **La carrera y la presidencia de Petro: patrocinio y financiación**

Según el jefe de inteligencia venezolano Hugo "El Pollo" Carvajal, la trayectoria política del presidente Gustavo Petro ha recibido respaldo financiero de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro desde el año 2000. Variaciones de esta afirmación han reaparecido durante las últimas dos décadas en procesos judiciales e informes de medios, ocasionalmente replicadas en declaraciones atribuidas a funcionarios venezolanos<sup>1</sup>.

También existe controversia en torno a la financiación de la campaña presidencial de Petro en 2022. Investigaciones e informes han señalado posibles irregularidades, incluyendo presuntas contribuciones ilícitas y violaciones a los límites legales de gasto<sup>2</sup>. Las autoridades electorales colombianas ya han sancionado a miembros del equipo de campaña por exceder los topes de financiación, intensificando el escrutinio sobre su estructura de financiamiento.

Testimonios y materiales atribuidos a individuos vinculados a grupos armados y crimen organizado –incluyendo al comandante disidente de las FARC Néstor Vera (alias Iván Mordisco)<sup>3</sup>, Diego Marín Buitrago (alias "Papá Pitufo", un importante contrabandista)<sup>4</sup>, Andrés Felipe Marín Silva (alias "Pipe Tuluá", vinculado al Cartel de la Inmaculada)<sup>5</sup> y Alexander Díaz Mendoza (alias Calarcá)<sup>6</sup>, entre otros– afirman que contribuyeron con dinero a la campaña de Petro en 2022.

La controversia se profundizó cuando Nicolás Petro, hijo del presidente, reconoció haber recibido dinero de empresarios y personas vinculadas al narcotráfico, afirmando que parte de esos fondos llegaron a la campaña de su padre<sup>7</sup>. Paralelamente, ha surgido escrutinio internacional, con fiscales estadounidenses examinando posibles vínculos entre narcotraficantes y la financiación de la campaña, aunque no se han presentado cargos y Petro niega cualquier irregularidad.

Las preguntas sobre la financiación de campañas no son nuevas. Durante la candidatura de Petro a la alcaldía de Bogotá, un video ampliamente difundido lo mostró recibiendo dinero en bolsas plásticas. Aunque el origen y la legalidad de esos fondos nunca se establecieron de manera concluyente, el episodio sigue generando inquietudes.

Finalmente, algunas figuras vinculadas a escándalos de financiación pasados han salido de Colombia hacia Europa, en algunos casos bajo protección gubernamental, replicando patrones observados en investigaciones más recientes.

### **La administración más corrupta de la historia**

Desde que asumió el cargo, la administración del presidente Petro ha enfrentado un intenso escrutinio por corrupción y transparencia, con tres controversias dominando el debate: el

escándalo de la UNGRD, el escándalo de Inviás y el aumento en 2026 de contratos de prestación de servicios, a menudo denominado una "administración paralela".

El escándalo de la UNGRD involucra contratos de emergencia presuntamente inflados que desviaron fondos para desastres con poca supervisión. Un caso relacionado en Inviás acusa a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco de direccionar contratos en ambas entidades, con programas como "Caminos Comunitarios para la Paz Total" bajo críticas por documentación débil, falta de licitación y posible mala gestión a gran escala, extendiéndose ahora al Congreso<sup>8</sup>.

En 2026, aumentaron las preocupaciones por el incremento de contratos temporales –alrededor de 7.000 nuevos cargos y un fuerte aumento del gasto. Los críticos lo califican como una "administración paralela" impulsada políticamente que evita la contratación basada en mérito, mientras que el gobierno afirma que es necesario para la ejecución y eficiencia.

También se han planteado inquietudes sobre los viajes del presidente Petro y la vicepresidenta Márquez. Informes mencionan cerca de 130 viajes internacionales –a menudo con delegaciones de más de 30 personas– con costos de millones de dólares. Los críticos cuestionan la transparencia, señalando agendas poco claras y escasa información sobre los asistentes.

Al mismo tiempo, los choques repetidos con los órganos de control, los sectores de oposición y las normas institucionales establecidas han generado preocupaciones sobre el respeto al orden constitucional, la independencia judicial y el pluralismo político.

Cabe destacar que Gustavo Petro ha sido descrito, en múltiples ocasiones, como alguien que ha excedido las funciones asignadas a otras instituciones del Estado, incluida la Fiscalía General de la Nación<sup>9</sup>, lo que refuerza un patrón más amplio de relaciones tensas entre ramas del poder y de incertidumbre jurídica.

### **Los principales objetivos de Petro: niños, jóvenes y mujeres**

Bajo la administración del presidente Petro, informes indican que al menos 254 niños en Colombia han muerto en medio de retrasos o falta de acceso a medicamentos esenciales. Entre los casos más citados se encuentra Kevin Acosta, un niño de 7 años con hemofilia, quien falleció tras no recibir tratamiento oportuno<sup>10</sup>.

Igualmente, alarmantes son las preocupaciones persistentes sobre menores en territorios controlados por grupos armados y el crimen organizado vinculados a la política de "Paz Total" de Petro. Los informes señalan que niños y adolescentes enfrentan reclutamiento forzado, explotación sexual y su utilización en operaciones criminales.

Grupos como el ELN, disidencias de las FARC y el Clan del Golfo han sido acusados de involucrar sistemáticamente a menores en sus actividades, incluyendo reclutamiento desde edades tan tempranas como los 10 años, abuso sexual y el uso de niños como escudos humanos<sup>11</sup>.

que se entregó dinero a la campaña presidencial de Petro a través de la hoy vicepresidenta, Francia Márquez.

<sup>7</sup> En una entrevista y en testimonio ante la Fiscalía General de la Nación en agosto de 2023, Nicolás Petro Burgos –hijo del presidente Gustavo Petro– declaró que parte del dinero que él y otros recibieron de personas con vínculos con el narcotráfico fue utilizado en la campaña presidencial de su padre en 2022.

<sup>8</sup> Archivo de Envías, Semana, 28 de marzo, pp. 10-14.

<sup>9</sup> El aliado de Petro y exdirector de la DNI, Lemus, habría negociado con "Papá Pitufo" (actualmente bajo protección de Portugal), vinculado al financiamiento de la campaña de Gustavo Petro en 2022. A cambio, se le permitiría regresar a Colombia como "facilitador de paz", en un esquema similar a casos como el de "El Zarco" –una medida que, según críticos, busca garantizar su silencio y invade competencias reservadas exclusivamente a la Fiscalía General de la Nación.

<sup>10</sup> Kevin Acosta, el niño colombiano que murió esperando un medicamento para la hemofilia (y la indignación generada por la respuesta del gobierno), BBC, 8 de febrero de 2026 (actualizado el 18 de febrero de 2026).

<sup>11</sup> Ver informes de [www.360geopolitica.org](http://www.360geopolitica.org) sobre niños.

<sup>1</sup> <https://www.youtube.com/watch?v=xq5TDv3NL7w>

<sup>2</sup> Confirmado por el Consejo Nacional Electoral, a pesar de que Petro y su partido ejercieron presión sobre varios de sus miembros, y uno renuncio del CNE.

<sup>3</sup> En marzo de 2024, un video difundido por Noticias Caracol mostró a Iván Mordisco respondiendo con enojo a las críticas del presidente Gustavo Petro, diciendo (aproximadamente): "cuando lo apoyamos en la campaña, no éramos narcotraficantes". Ese video fue publicado alrededor del 21 de marzo de 2024.

<sup>4</sup> Según las investigaciones reveladas por Noticias Caracol, las reuniones entre Jorge Lemus (entonces director de la Dirección Nacional de Inteligencia - DNI) y Luis Felipe Ramírez, abogado del alias "Papá Pitufo" (Diego Marín), tuvieron lugar a comienzos de 2025. En nombre de Petro, Lemus ofreció beneficios jurídicos a Pitufo –posible facilitador de paz.

<sup>5</sup> Pipe Tuluá (Andrés Felipe Marín Silva) afirmó en una grabación que financió la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 con fondos ilícitos, supuestamente a través del hermano del presidente, Juan Fernando Petro. Según el audio divulgado, Marín dijo que tiene "videos, audios y consignaciones" que probarían estos aportes y que está dispuesto a presentarlos ante tribunales en Estados Unidos.

<sup>6</sup> La Fiscalía General de la Nación confirmó la autenticidad y exactitud de los documentos y archivos incautados en los computadores y dispositivos del alias Calarcá, los cuales indican

Otras denuncias apuntan a la captación de adolescentes y jóvenes en intentos por influir en universidades públicas –y en algunos casos privadas–, con afirmaciones de que estos grupos desempeñan un papel en su organización y formación ideológica<sup>12</sup>.

Críticos sostienen que el gobierno minimiza la crisis al presentar a los jóvenes afectados principalmente como personas pobres, en lugar de confrontar las redes criminales que los explotan; un enfoque que, según ellos, permite que dichas redes crezcan, agravado por el silencio de figuras como Iván Cepeda y el partido Pacto Histórico.

### **Expansión del poder criminal bajo la “Paz Total”**

La expansión de las economías ilegales ha sido sorprendente. Solo la minería ilegal de oro genera un estimado de entre 8,4 y 9 mil millones de dólares anuales, a lo que se suman los ingresos del narcotráfico, el tráfico de armas y la trata de personas.

En el mismo período, la afiliación a organizaciones criminales casi se ha duplicado –de alrededor de 13.000 a 27.000–, lo que ha permitido a estos grupos consolidar sistemas paralelos de control en zonas con presencia estatal limitada<sup>13</sup>.

El crecimiento de estas redes ha alimentado la violencia y ha ampliado su influencia política, otorgando –según informes– una ventaja significativa a los candidatos alineados con Petro. Los vínculos con el Pacto Histórico y figuras como Iván Cepeda generan preocupaciones sobre la gobernabilidad.

En las elecciones legislativas del 8 de marzo, al menos 300 municipios dominados por grupos criminales supuestamente dieron al partido el 100% de los votos en medio de presiones sobre los votantes<sup>14</sup>.

### **Crisis humanitaria y control territorial**

En regiones como Chocó, el ELN y el Clan del Golfo explotan de manera agresiva a comunidades indígenas y afrocolombianas, restringiendo su movilidad y el acceso a servicios básicos. Los informes detallan abusos generalizados, incluyendo trata de personas y explotación sexual de menores a lo largo de corredores clave como Medellín-Quibdó y Pereira-Quibdó<sup>15</sup>.

Crisis similares persisten en Buenaventura, Catatumbo y los departamentos de Arauca, Guainía, Vichada, Amazonas, Cauca, Nariño y Putumayo, donde niños –algunos de tan solo diez años– son reclutados por la fuerza, se les niega protección y quedan excluidos de servicios básicos. Los organismos de control describen estos abusos como parte de un sistema de violencia profundamente arraigado, aún más alarmante por la inacción del gobierno de Petro.

Una falta de voluntad para enfrentar a los actores criminales – combinada con la alineación política de las comunidades afectadas– ha producido una parálisis peligrosa. La urgencia es respondida con silencio, dejando a las poblaciones indígenas, afrocolombianas y vulnerables atrapadas entre la expansión criminal y el abandono estatal<sup>16</sup>.

Estas dinámicas no son nuevas, sino que reflejan profundas continuidades históricas. El conflicto armado en Colombia ha estado marcado durante mucho tiempo por violaciones sistemáticas de derechos humanos. Entre 1971 y 2016, las FARC-EP reclutaron y abusaron de al menos 18.677 niños, con patrones documentados de violencia sexual y abortos forzados<sup>17</sup>.

La justicia transicional ha avanzado en la rendición de cuentas en algunos ámbitos, pero persisten vacíos, especialmente en los delitos de violencia de género. Los críticos advierten que los enfoques restaurativos corren el riesgo de dejar a las víctimas sin verdad completa ni reparaciones.

Las controversias políticas, incluido el presunto “Pacto de la Picota<sup>18</sup>”, alimentan la percepción de líneas difusas entre la autoridad estatal y la influencia criminal. Un elemento central de la política de “Paz Total” es el uso de facilitadores reconocidos por el gobierno para negociar con grupos armados. Los críticos advierten que designar a personas con antecedentes criminales graves permite en la práctica que continúen con actividades ilegales – desde el tráfico y el secuestro hasta el reclutamiento de menores y la explotación de recursos.

Bajo el gobierno de Petro, estos grupos han aumentado en número de combatientes y recursos financieros, convirtiéndose en aliados clave para su partido tanto en elecciones legislativas como presidenciales.

### **Escalada de violencia y evolución de las tácticas**

Desde que el presidente Petro asumió el cargo, la violencia en Colombia se ha vuelto más compleja, con un uso creciente de drones y explosivos contra militares, policías y civiles.

El desplazamiento, las masacres<sup>19</sup> y el reclutamiento forzado – especialmente de menores– siguen siendo generalizados, con informes de un aumento de la explotación infantil<sup>20</sup>. En varias regiones (al menos el 70% del territorio), se asesina a civiles, se ataca a defensores de derechos humanos y los servicios básicos están severamente limitados.

Más allá de la corrupción, la violencia política se ha incrementado, alcanzando su punto máximo con el asesinato del senador y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, vinculado a disidencias de las FARC, la Segunda Marquetalia.

Las investigaciones y testimonios han vinculado a figuras como Iván Márquez y el alias “Zarco Aldinever” con la cadena de mando. Aldinever, un exfacilitador de paz reconocido por el gobierno con movilidad nacional, habría ordenado el asesinato del senador y candidato presidencial antes de huir hacia la frontera venezolana. También se le menciona, junto con Simeón Pérez Marroquín (“El Viejo”), como parte de la red que coordinó el crimen.

El clima político se vio además alimentado por la retórica confrontativa de figuras como Petro e Iván Cepeda. Los críticos sostienen que esta polarización, combinada con la política de “Paz Total” que otorga reconocimiento y margen de maniobra a grupos criminales, creó condiciones que hicieron más probable este tipo de violencia, aunque la responsabilidad penal directa sigue bajo revisión judicial<sup>21</sup>.

Desde esta perspectiva, algunos críticos responsabilizan políticamente a Petro y Cepeda, argumentando que las políticas que permiten a miembros de grupos criminales moverse libremente bajo marcos de paz contribuyeron a crear las condiciones para el ataque. Los presuntos vínculos históricos entre estas figuras e Iván Márquez siguen siendo objeto de debate.

Los críticos afirman que el gobierno inicialmente presentó el asesinato como un acto aislado de un menor con desesperación económica, pero las pruebas muestran una operación coordinada

<sup>12</sup> En una investigación de Semana publicada el 20 de diciembre de 2025, la revista informó que las autoridades accedieron a expedientes, entrevistas y grabaciones que muestran que un grupo radical involucrado en los episodios violentos vinculados al estallido social en Bogotá tenía organización jerárquica, entrenamiento y financiación con aparentes vínculos con actores armados ideológicamente afines al ELN –incluyendo reclutamiento en campus universitarios y estructuras operativas organizadas dentro de las protestas.

<sup>13</sup> La política de Paz Total fracasó, Semana, 12 de abril, pp. 10-14.

<sup>14</sup> Combinado con prácticas de compra de votos y estrategias electorales de trashumancia, esto podría representar al menos un millón de votos a nivel nacional.

<sup>15</sup> Se venden niñas vírgenes en Colombia, www.360geopolitica.org

<sup>16</sup> Estas comunidades recibieron contratos importantes para guardar silencio y apoyar el gobierno de Petro.

<sup>17</sup> FARC-EP: 18.677 niños reclutados, violados y abusados, www.360geopolitica.org

<sup>18</sup> El hermano de Petro habría ofrecido a grupos criminales inmunidad, control territorial y acuerdos de continuidad de sus actividades a cambio de apoyo político.

<sup>19</sup> Las masacres han aumentado drásticamente desde 2024 y casi se duplicaron en el primer trimestre de 2026, según la Defensoría del Pueblo e INDEPAZ, 2026.

<sup>20</sup> UNICEF: el reclutamiento aumentó un 300%.

<sup>21</sup> La Segunda Marquetalia ordenó el asesinato de Miguel, Semana, 21 de marzo, pp. 10-14.

que involucró más de 300.000 dólares y múltiples participantes, dirigida por “Zarco Aldinever” e Iván Márquez, según el operador logístico alias “El Viejo”.

Señalan que el estatus de facilitador de paz de Aldinever fue revocado solo 40 días después –tiempo que los críticos consideran suficiente para que huyera– y cuestionan las afirmaciones previas del Ministerio de Defensa sobre su muerte<sup>22</sup>, que nunca estuvieron respaldadas por evidencia pública concluyente.

### **Devastación ambiental y economías ilegales**

Paralela a la crisis de seguridad en Colombia se encuentra una emergencia ambiental cada vez más profunda, impulsada en gran medida por economías ilegales. Las organizaciones criminales incrustadas en la minería ilegal de oro continúan devastando bosques, ríos y ecosistemas, al tiempo que consolidan el control territorial.

La contaminación por mercurio es especialmente grave, con grandes cantidades que ingresan a los cursos de agua cada año. Esta contaminación se bioacumula en peces y seres humanos, aumentando riesgos a largo plazo como daños neurológicos y trastornos del desarrollo. Al mismo tiempo, la sedimentación y la alteración de los ríos degradan los ecosistemas acuáticos, socavando la seguridad alimentaria y los medios de vida de las comunidades ribereñas.

La deforestación sigue siendo crítica. A pesar de las disminuciones a corto plazo reportadas en 2023, la infraestructura minera continúa abriendo áreas remotas a la tala, la apropiación de tierras y la expansión agrícola. Regiones clave de biodiversidad como la Amazonía y el Chocó están cada vez más fragmentadas, debilitando la resiliencia de los ecosistemas y reduciendo la capacidad de Colombia para la regulación climática.

El cultivo ilegal de coca agrava aún más el daño ambiental a través de la degradación del suelo, la escorrentía de químicos y la contaminación del agua, reforzando un patrón más amplio de extracción ecológica vinculado al control armado del territorio.

Los críticos sostienen que la gobernanza ambiental ha sido inconsistente: mientras las actividades extractivas legales enfrentan restricciones más estrictas, la aplicación de la ley contra la explotación ilegal sigue siendo débil, lo que permite que las redes criminales se expandan y se arraiguen.

En este contexto, argumentan que las brechas en la política estatal han fortalecido a los grupos armados ilegales y a las economías criminales, actores que no solo impulsan la destrucción ambiental, sino que también alimentan la violencia, el desplazamiento y la explotación en comunidades vulnerables.

### **Narrativas, datos y percepción internacional**

Los debates sobre la medición y la percepción han polarizado aún más el análisis. Los críticos argumentan que indicadores clave – como la producción de coca, los niveles de violencia y el desempeño económico– han sido modificados de manera unilateral por el gobierno para presentar una narrativa más favorable.

Organizaciones internacionales, incluidas las Naciones Unidas, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos, han sido objeto de escrutinio por basarse en dichos datos oficiales, lo que ha generado preocupaciones sobre las brechas entre el progreso reportado y la realidad en el terreno.

Algunos analistas también advierten que el discurso internacional ha, durante casi 25 años, romantizado y politizado a grupos criminales como las FARC-EP, el ELN y ahora las disidencias de las

FARC y el Clan del Golfo, ocultando abusos y destrucción ambiental en curso.

Desde que el presidente Petro asumió el cargo, varios países europeos –tanto dentro como fuera de la UE– han defendido a su gobierno en foros internacionales como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos.

Al mismo tiempo, estos gobiernos han asegurado –o están buscando– contratos lucrativos con su administración en sectores que van desde el gas y la aviación hasta pasaportes y café, mientras se crea la ilusión de exitosas incautaciones de cocaína.

Esta doble postura plantea serias preocupaciones. Sugiere una dinámica transaccional en la que el apoyo político está estrechamente ligado a ganancias económicas y estratégicas, relegando a un segundo plano los derechos humanos y la rendición de cuentas.

Para muchos colombianos, esto refleja un patrón global más amplio, en el que las vidas y derechos de poblaciones –como iraníes, ucranianos, palestinos y venezolanos– se tratan como negociables, subordinados a los intereses de gobiernos y corporaciones.

Estos intercambios exigen un escrutinio urgente. Cuando los actores internacionales parecen dispuestos a pasar por alto preocupaciones graves a cambio de contratos o cooperación estratégica, erosionan la credibilidad de los valores democráticos y de derechos humanos que dicen defender.

### **Conclusiones**

Las políticas del presidente Gustavo Petro, su partido político y su principal candidato presidencial Iván Cepeda están impulsando asesinatos generalizados y la devastación ambiental en todo el país a través de asociados vinculados a la estrategia de “Paz Total”: grupos armados ilegales y el crimen organizado.

Se les acusa de fomentar la violencia, expandir economías ilegales que dañan los ecosistemas y profundizar la explotación y el desplazamiento de comunidades vulnerables. Los niños son especialmente afectados, enfrentando reclutamiento forzado, violencia sexual y un acceso limitado a servicios básicos.

Durante los últimos 25 años, actores internacionales –incluidos Irán (Hezbollah/Hamás), Rusia y algunos estados europeos– han invertido millones de dólares en la legitimación política de organizaciones criminales como las FARC-EP, las disidencias de las FARC y el ELN, entre otras organizaciones ilegales.

Desde que Petro está en el poder, dichos actores –principalmente estados europeos– han financiado películas, libros, conferencias y exposiciones que retratan a estos grupos de forma más favorable, y también han participado en el acercamiento diplomático y el reconocimiento público de figuras políticas vinculadas a ellos y al presidente Petro.

### **360° Geopolítica.**

<sup>22</sup> “El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, declaró el 11 de agosto de 2025 que el individuo conocido como ‘Zarco Aldinever’, líder de la Segunda Marquetalia, había sido asesinado por el ELN en Venezuela.”